

Gobernanza Tiránica de Venezuela

www.360geopolitica.org

Resumen Ejecutivo

Desde 1999, Venezuela ha estado gobernada por el Chavismo, primero bajo Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, creando uno de los regímenes autoritarios más arraigados de la región. Bajo la apariencia del socialismo “Bolivariano”, el régimen ha concentrado el poder, debilitado las instituciones democráticas y dependido de grupos armados ilegales y redes criminales transnacionales para mantener el control.

Los abusos a los derechos humanos –incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y represión sistemática– son generalizados, lo que ha llevado a más de ocho millones de venezolanos a abandonar el país.

El gobierno de Maduro se alinea estrechamente con el presidente colombiano Gustavo Petro y la coalición El Pacto Histórico. Ambos regímenes comparten similitudes estructurales: narrativas populistas, dependencia de actores armados y consolidación del poder político a través de redes que socavan la democracia. En Colombia, iniciativas como el proceso de “Paz Total” han legitimado a actores criminales, difuminando aún más la línea entre gobernanza y coerción.

Los venezolanos enfrentan pocas esperanzas de restauración democrática desde adentro. Tras más de 25 años de dictadura, la intervención externa puede ser la única vía viable para proteger los derechos humanos, restaurar las instituciones democráticas y permitir que los casi nueve millones de refugiados regresen de manera segura. Una acción inmediata y decisiva es esencial para contrarrestar la convergencia de autoritarismo, influencia criminal y complicidad extranjera que sostiene la tiranía en Venezuela.

Desde 1999, Venezuela ha estado bajo el dominio ininterrumpido del Chavismo, un movimiento político impulsado por Hugo Chávez a través de la llamada “Revolución Bolivariana”. El ascenso de Chávez, tras su victoria electoral en diciembre de 1998 y su toma de posesión en febrero de 1999, marcó el inicio de una nueva era en la política venezolana. Aunque se

presentó como un movimiento basado en los ideales de Simón Bolívar y el “socialismo del siglo XXI”, la perdurabilidad del Chavismo refleja mucho más que ideología. Depende de la autoridad centralizada, mecanismos coercitivos y estrategias populistas que han vaciado sistemáticamente las instituciones de Venezuela.

La gobernanza de Chávez estableció un modelo populista de izquierda que concentró el poder alrededor de su persona, debilitando la independencia judicial, la supervisión legislativa y otros controles y equilibrios democráticos. La inclusión se presentó como participación, pero la rendición de cuentas democrática genuina estaba ausente.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el liderazgo y escaló esta trayectoria autoritaria. Bajo Maduro, la autonomía institucional se ha erosionado aún más, las violaciones de derechos humanos se han intensificado y las prácticas extrajudiciales –incluyendo la dependencia de grupos armados ilegales y redes criminales transfronterizas– se han consolidado en el funcionamiento del Estado.

El régimen de Maduro ha demostrado un patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular. Las últimas elecciones celebradas en Venezuela no fueron respetadas, marcadas por irregularidades, falta de transparencia y restricciones a la participación de la oposición.

Observadores independientes y organismos internacionales denunciaron fraude electoral, manipulación de resultados y represión de votantes críticos, consolidando la percepción de que el poder se mantiene por medio de la coerción y no de la legitimidad democrática. Esta conducta refuerza la crisis institucional y la desconfianza ciudadana en cualquier proceso electoral futuro.

Los informes sugieren vínculos con organizaciones criminales regionales y, en algunos casos, con redes terroristas transnacionales, lo que ilustra la dependencia

del régimen de estructuras de poder ilícitas para mantener el control.

Chávez y Maduro cultivaron alineamientos políticos estratégicos en el exterior, notablemente con el presidente colombiano Gustavo Petro y su coalición, El Pacto Histórico. Entre 2018 y 2022, Petro y varios de sus aliados, incluidos exalcaldes de Bogotá, Cali y Medellín apoyaron abiertamente al gobierno de Maduro, postura que continúan manteniendo.

Ambos regímenes muestran similitudes notables: dependencia de narrativas populistas, colaboración con grupos armados ilegales y organizaciones criminales, y consolidación de influencia política mediante redes criminales.

En Colombia, iniciativas como el proceso de “Paz Total” han otorgado a estos grupos una legitimidad política sin precedentes, difuminando las distinciones entre gobernanza y criminalidad. La caracterización pública de Petro de ciertos actores armados como “hermanos” refleja la retórica de Maduro, minimizando efectivamente el reconocimiento de los venezolanos y colombianos como víctimas de la violencia estatal y criminal.

El costo humanitario en Venezuela es severo. La dependencia del Estado de grupos armados ha arraigado la represión como política central. Más de nueve millones de venezolanos han abandonado el país, mientras que tres millones residen en Colombia, a menudo registrados únicamente como “turistas” en estadísticas oficiales.

Los abusos de derechos humanos bajo Maduro son sistemáticos. Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y la supresión de la libertad de asociación son generalizadas. El informe 2025 del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos

Humanos resalta violaciones en curso, incluyendo arrestos políticamente motivados de figuras de la oposición y defensores de derechos humanos, negación de servicios básicos en detención y discriminación sistemática contra mujeres, personas LGBTIQ+ y víctimas de violencia de género.

La gobernanza del régimen de Maduro, respaldada internacionalmente por aliados como Colombia, Cuba, Nicaragua, Rusia y, en cierta medida, España, *no muestra indicios* de transición hacia la democracia. Su alineamiento con redes criminales y armadas –tanto a nivel nacional como transfronterizo– refuerza el control autoritario y excluye negociaciones políticas significativas.

En Colombia, la participación de Petro con estas redes ha fortalecido su coalición política y la ha posicionado como fuerza dominante de cara a las próximas elecciones, mientras socava simultáneamente la independencia institucional y las normas democráticas.

Durante casi un cuarto de siglo, Venezuela ha vivido bajo dictadura. La convergencia de poder político, crimen organizado y alineamiento extranjero deja a los venezolanos con pocos recursos internos.

La restauración democrática requerirá acción decisiva, incluyendo una posible intervención internacional, para proteger los derechos de millones de ciudadanos que desean una transición democrática segura y legítima.

La historia demuestra que los regímenes autoritarios duraderos rara vez ceden el poder voluntariamente, subrayando la urgente necesidad de compromiso externo para restaurar la libertad, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Bogotá, Colombia - 10 de diciembre de 2025.